TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: Exp. 25320-31-89-001-2019-00039-02.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por la demandada Norma Liliana Mahecha Gómez contra el auto de 3 de diciembre del año anterior proferido por el juzgado promiscuo del circuito de Guaduas dentro del proceso de expropiación promovido promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra Corina Esperanza Gómez, Gloria Estela, María Eugenia, Camilo Ernesto, Vidal Alfonso, la recurrente y Jairo Mahecha Gómez, en calidad de herederos determinados de José Mahecha Hernández y herederos indeterminados del citado causante, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Proferida la sentencia que decretó la expropiación del inmueble objeto del proceso para el desarrollo del proyecto vial Honda-Puerto Salgar-Girardot, pidió la demandada declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, aduciendo para ello que el juzgado de Guaduas carecía de competencia para conocer del proceso, pues la jurisprudencia ha dicho que si bien cuando se ejercen derechos reales opera el factor territorial, de tal suerte que si una entidad pública obra como parte, el fuero privativo es el domicilio de ésta, que para el caso es la ciudad de Bogotá.

Previo traslado a la parte demandante, mediante el proveído apelado, el a-quo denegó esa solicitud haciendo

ver que frente al caso obran dos competencias privativas, la del lugar de ubicación del inmueble y la del domicilio de la entidad, de modo que si la demandante escogió entre esas dos el fuero objetivo para garantizar de mejor forma el acceso a la administración de justicia, a esa elección debe estarse.

Inconforme con esa determinación, formuló la heredera recurso de apelación, el que le fue concedido en el efecto suspensivo y que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

Lo despliega sobre la idea de que siendo la demandante una entidad pública de la orden nacional, con domicilio en Bogotá, los competentes para conocer del proceso son los jueces de Bogotá, pues siempre debe primar ese fuero 'público', como se señaló en el Auto de Casación AC140-2020; además, la actora no es la que puede determinar la competencia para conocer de determinado asunto, pues para ello debe ajustarse a los procedimientos y reglas establecidas, todo lo más si esa renuncia que hizo de ese fuero no tiene por fin garantizar el acceso a la administración de justicia, porque la mayoría de demandados viven en la ciudad de Bogotá y no en el lugar de ubicación del inmueble.

Consideraciones

A propósito de la discusión que plantea la apelación, debe relievase que dentro de su libertad de configuración, el legislador ya no sanciona con nulidad las actuaciones que adelanta el juez que carece de competencia por el factor territorial, antes de que se dicte sentencia, salvo que previamente haya declarado su incompetencia para conocer de ese asunto; algo que no parece ser fortuito, sino precisamente porque aquél *“tomó en consideración, según las circunstancias, que la determinación del juez competente en los asuntos regidos por el CGP es compleja y la instrucción del asunto, por parte del juez incompetente, no*

resulta de una intención de disminuir garantías procesales, ni tiene este efecto, lo que sería reprochable”, al punto que, díjose por la jurisprudencia al analizar la compatibilidad de esa norma que sanciona con nulidad solo la falta de competencia por los factores subjetivo y funcional, que la “conservación de validez de la actuación procesal, antes de la declaratoria de incompetencia, es una medida válida que pretende la eficacia del derecho de acceso a la justicia, con la obtención de una decisión en términos razonables, con respeto del principio constitucional de celeridad de la administración de justicia, economía procesal, la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial, sobre el adjetivo, ya que evitará repetir, sin razón de garantías, lo actuado en debida forma por el juez ahora declarado incompetente y excluye la declaratoria de nulidad, por esta causal, como un mecanismo de dilación del proceso. Así, la norma también es una medida razonable para evitar la congestión de la justicia” (Sentencia C-537 de 2016).

O sea, el propósito de la medida no es otro que conjurar ese desgaste añoso e innecesario del aparato judicial, en el que siempre el más afectado es el usuario, con el objeto de que un asunto que ha sido “*instruido adecuadamente*”, no tenga que rehacerse no más que por los descuidos en materia de competencia territorial, a sabiendas de que esto se surtió adecuadamente, algo suficientemente demostrativo de que existiendo dos posibilidades de cara a la existencia del proceso, la que debe primar tiene que ser, al abrigo de cualquier duda, la de su conservación, principio que en el ámbito de las nulidades del que se nutre el derecho del debido proceso.

Así las cosas, lo propio es analizar la validez de la sentencia, pues lo que dice el precepto 16 del código general del proceso es que la “*jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el*

proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo”, lo que ha llevado a sostener que con esa regla lo que hizo el legislador fue “establecer el carácter de improrrogable a los citados foros de distribución, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determinó que aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicción y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagró fue una excepción al principio de la perpetuatio jurisdictionis”, norma de orden público de la que “surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10° del artículo 28 del citado estatuto” (Cas. Civil Auto de 24 de enero de 2020, exp. AC140-2020).

Pues bien. Tratándose de un proceso de expropiación promovido por una entidad pública, lo primero que podría pensarse es que la competencia estaría disciplinada por las reglas previstas en los numerales 7° y 10° del artículo 28 del código general del proceso, a cuyo tenor se tiene que en “*los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante*” y que en “*los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad*”, respectivamente.

La jurisprudencia tiene dicho, a propósito de esto, sin embargo, que el enfrentamiento entre las dos normas encuentra solución en el artículo 29 del citado ordenamiento, cuando dispone que “[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes”, de modo que “ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial”, de suerte que “tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente” (AC140-2020).

Ocurre, con todo, que en un pronunciamiento posterior, si bien reiteró que en los “juicios de expropiación la competencia territorial la determina el lugar donde se encuentra el predio objeto del litigio, por aplicación del numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, esta adscripción en el sub lite debe ceder por el domicilio de la entidad descentralizada, por virtud del numeral 10° de la citada codificación adjetiva, en concordancia con el canon 29 del CGP, que da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro”, en tratándose de “la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-“, que si ésta “manifestó ante el Juzgado (...) su predilección para que prevalezca el fuero real determinado por la ubicación de inmueble, conforme al numeral 7° del canon 28 del Código General del Proceso, sobre el fuero subjetivo (domicilio de la demandante), manteniendo la competencia del proceso de expropiación en tal estrado judicial, con el loable propósito de que los demandados tengan acceso de manera directa al presente juicio, esto es, en la localidad donde se encuentra el predio sin tener que desplazarse a la ciudad de Bogotá; concluye

esta Sala que, sin ser necesario un pronunciamiento sobre la exequibilidad de las reglas previstas en el canon 28 del Código General del Proceso, tal manifestación comporta una renuncia al fuero subjetivo, para darle primacía al fuero real porque, en sentir de la peticionaria, desarrolla mejor el principio constitucional de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) de los demandados y garantiza el desenvolvimiento de los postulados del derecho al debido proceso (art. 29 ibídem); privilegio que puede ser declinado por la entidad pública demandante, cuando ésta decide ejercer las acciones que considere pertinentes ante la autoridad judicial receptora, como es el caso de autos, y sin que posteriormente le sea posible retratarse de tal determinación” (Cas. Civ. Auto de 3 de agosto de 2020, exp. AC1723-2020).

Así que si “*en virtud de la autonomía de la voluntad se puede declinar la protección derivada de la exención jurisdiccional, con el objeto de promover una acción civil, o para atender una demanda en la que se pretenda su vinculación”* (Cas. Civ. Auto de 25 de octubre de 2016, exp. AC7245-2016), debe convenirse en que, en este caso, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura presentó la demanda ante el juzgado de ubicación del inmueble, renunció a ese factor de atribución subjetivo, sin que por ello pueda predicarse la nulidad de la sentencia, pues aunque no todos los demandados tienen su domicilio en Guaduas, sí algunos de ellos lo tienen allí, a quienes procuró no imponerles la carga de atender el proceso por fuera de su vecindad, amén de que con esa atribución de competencia se garantiza de mejor manera el principio de inmediación del juez de conocimiento en la práctica de pruebas, como testimonios e inspección judicial, así como también para realizar las diligencias de entrega provisional y definitiva del predio sin la dilación que en algunos casos trae consigo la comisión para su práctica, algo que en vez de restar, termina sumando en el propósito de dar prevalencia al interés general que está de por medio en los procesos de esta naturaleza.

Lo dicho basta para la confirmación de la decisión apelada. Las costas, ya para terminar, se impondrán con sujeción a la regla 1ª del artículo 365 del código general del proceso.

II. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo de la recurrente. Liquídense por la secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno incluyendo la suma de \$250.000 como agencias en derecho.

En firme, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**GERMAN OCTAVIO RODRIGUEZ VELASQUEZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO
SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 004 CIVIL - FAMILIA
DE CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**ad7d514121e89c25fc9bb4a8c9d7fa6a9e06289f81d33d113
8f9959e93fac504**

Documento generado en 30/04/2021 11:10:53 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**